INFORME DE ASESORÍA EXTERNA
AL SENADOR MANUEL JOSÉ OSSANDÓN
ABOGADO ALBERTO JARA A.
ACTIVIDADES DE FEBRERO DE 2017

Valparaíso, 01 de marzo de 2017

A: Sr. Jaime Rojas Flores
Director Nacional de Gendarmería de Chile

DE: Sr. Manuel José Ossandón Irarrázabal
Senador de la República

REF.: Situación humanitaria del ex carabinero que
falleció esposado a cama de hospital Dipreca

De mi consideración:

En virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en mi calidad de Senador solicito al Director Nacional de Gendarmería, Sr. Jaime Rojas Flores, que, en primer término, tenga a bien informar la situación humanitaria del ex carabinero e interno de la cárcel de Punta Peuco, Gustavo Muñoz Albornoz, quien aquejado de un cáncer terminal falleció a los 75 años de edad en el Hospital Dipreca, esposado a la camilla donde se encontraba recibiendo los cuidados paliativos.

Desde una perspectiva tutelar de los derechos humanos, interesa a este parlamentario conocer con certeza si a juicio de Gendarmería esta situación de mantener a un moribundo engrillado a su cama representa o no un atropello manifiesto a la dignidad personal. Esto por cuanto la circunstancia de mantener esposado a un reo en la etapa terminal de un cáncer renal crónico -que estaba acompañado además de una insuficiencia cardíaca, fractura de cadera, hipotiroidismo y diabetes, como consta en la ficha clínica del paciente- no parece proporcionado con el fin de evitar la fuga del interno.

En este mismo sentido, cabe tener presente la reflexión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia quien, tratando sobre los medios de coerción, señala: *“Los medios de coerción tales como esposas, cadenas, grillos y camisas de fuerza nunca deberán aplicarse como sanciones. Tampoco deberán emplearse cadenas y grillos como medidas de coerción. Los demás medios de coerción solo podrán ser utilizados en los siguientes casos: a) Como medida de precaución contra una evasión durante un traslado, siempre que sean retirados en cuanto comparezca el recluso ante una autoridad judicial o administrativa; b) Por razones médicas y a indicación del médico; c) Por orden del director, si han fracasado los demás medios para dominar a un recluso, con objeto de impedir que se dañe a sí mismo o dañe a otros o produzca daños materiales; en estos casos, el director*

deberá consultar urgentemente al médico e informar a la autoridad administrativa superior.” (cfr. “Protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Documentos básicos”, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, p. 73).

Más aún, todo parece indicar que, a la luz de los tratados de derechos humanos suscritos por Chile, en el caso del Sr. Muñoz Albornoz, quien en diciembre de 2016 había solicitado el indulto presidencial por razones humanitarias, éste fue sometido a un trato cruel, inhumano o degradante, incumpliendo el artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica, cuando dispone que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. En la misma línea, la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone en su artículo 5° que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Asimismo, en segundo lugar, es del máximo interés de este parlamentario, en cuanto miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, conocer si respecto de otros reos en la fase de una enfermedad terminal existen los protocolos para prevenir eventuales atropellos a sus derechos humanos y, en aquellas ocasiones en que aparezca que ellos han sido víctimas de un trato cruel, inhumano o degradante, se han instruido las investigaciones indispensables para determinar la claridad de estos hechos y hacer efectivas las responsabilidades que corresponda.

En tercer y último lugar, solicito al Director Nacional de Gendarmería que tenga a bien informar el número de visitas que, en los últimos tres años, ha recibido del Instituto Nacional de Derechos Humanos con el objeto de velar por la situación humanitaria de los reos gravemente enfermos, así como también de cualquier otra gestión llevada a cabo por este Instituto en el marco de las atribuciones que le encomienda su ley orgánica.

Se despide atentamente,

Manuel José Ossandón Irarrázabal
Senador

EN LO PRINCIPAL: SOLICITA INSTRUIR INVESTIGACIÓN
OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTO

SEÑOR FISCAL NACIONAL ECONÓMICO

MANUEL JOSÉ OSSANDÓN IRARRÁZABAL, Senador de la República, RUT 7.022.006-7, domiciliado para estos efectos en Avenida Pedro Montt, sin número,

Valparaíso, al Fiscal Nacional Económico, Sr. Felipe Irrázabal Philippi, respetuosamente digo:

EN LO PRINCIPAL

Que vengo en solicitar al Señor Fiscal Nacional Económico instruya una investigación respecto de la eventual vulneración a las normas que protegen la libre competencia en el mercado de los servicios de estacionamientos de vehículos, mediante posibles prácticas de concertación entre los competidores para el alza de precios o la fijación de condiciones de comercialización, o cualquiera otra conducta o figura de abuso de posición dominante que resulte de la investigación y que implique una transgresión a las normas sobre libre competencia. Las conductas típicas, que se encontrarían comprendidas en el artículo 3º, inciso segundo, letra a) del Decreto con Fuerza de Ley número 1, de 18 de octubre de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211 de 1973, habría sido realizada por un número no determinado de agentes económicos, en un período comprendido entre el 18 de noviembre de 2014 y el 17 de noviembre de 2016, correspondiente a la fecha de publicación de la ley 20.967, o incluso con posterioridad a tal época, cuestión que podría determinar la Fiscalía.

La solicitud que acompaño se basa en hechos públicamente conocidos, en cuanto a partir de la entrada en vigencia de la ley 20.967, el 15 de febrero de 2017, una serie de agentes económicos que incluyen a Besalco, Central Parking, Belfi, Saba, Mall Plaza, Grupo Pasmarr, Parque Arauco, Corpgroup Activos Inmobiliarios, Cencosud Shopping Center y Open Plaza, entre otros, dispusieron, en efecto, un alza de precios de sus servicios que, de acuerdo al Servicio Nacional del Consumidor¹, equivale a incrementos entre un 0,6% y 75,7% respecto de los precios anteriores a la entrada en vigencia de la ley.

Si bien la carga regulatoria incide normalmente en la estructura de precios de un mercado, en opinión del solicitante, aquella impuesta por la ley mencionada no parece justificar las magnitudes de las alzas de precio del servicio consignadas por SERNAC.

Al respecto, los agentes individualizados anteriormente, entre otros, formaron parte del debate legislativo de la ley 20.967, algunos de ellos representados por medio de la Cámara Chilena de Centros Comerciales A.G.; otros por medio de la Asociación

¹ Cfr. Servicio Nacional del Consumidor, disponible en <http://www.sernac.cl/ante-entrada-en-vigencia-de-ley-20-967-ministerio-de-economia-y-sernac-anuncian-acciones-por-incumpl/>. 24 de febrero de 2017.

Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos A.G. -esta última creada a propósito del trámite de la ley en mención según consta también en hechos públicamente conocidos²-; otros fueron representados por la Asociación de Operadores de Estacionamientos que, según se consigna en los informes de la historia de la ley, se encontraba “en proceso de conformación”, desconociéndose si ésta contaba con personalidad jurídica; y otras asociaciones gremiales y representantes de operadores del mercado.

En el marco de tales asociaciones gremiales y asociaciones de hecho, y teniendo en consideración las alzas inmediatas de precios en las considerables magnitudes que se han señalado, asiste al solicitante la razonable duda respecto de una posible concertación de los agentes del mercado para la determinación de precios, o al menos el alza de estos, y de las condiciones de comercialización del servicio, vulnerando de esta forma lo establecido en el artículo 3º del DL 211.

De la misma forma, vengo en solicitar al Señor Fiscal Nacional Económico que verifique si la actuación de las diversas asociaciones gremiales que se encuentran relacionadas con el trámite de la ley y el caso en estudio, se encuentran ajustadas a los lineamientos establecidos por la propia Fiscalía en la Guía de Asociaciones Gremiales y Libre Competencia de agosto de 2011, que, entre otras materias relevantes, analiza precisamente escenarios como el antes descrito al señalar:

“[...] es importante destacar que la coordinación entre competidores puede producir efectos anticompetitivos. Por su propia naturaleza, los encuentros entre competidores, facilitados por las reuniones en el seno de una A.G., representan un riesgo para la competencia, lo mismo que otras acciones de coordinación facilitadas u organizadas por el actuar de la A.G. [...]”

Como regla general, la FNE entenderá que toda colaboración o acuerdo entre dos o más competidores, que les confiera poder de mercado, respecto de la cual exista o no constancia escrita, y que produzca o tienda a producir: la fijación de precios actuales o futuros de venta o compra; la determinación de condiciones de comercialización; la limitación de volúmenes de producción; la asignación de zonas o cuotas de mercado; la exclusión de competidores; o la afectación del resultado de procesos de licitación, constituye una infracción a la libre competencia, conforme lo establecido en el D.L. N° 211”.

² Cfr. Tele13 <http://www.t13.cl/noticia/negocios/empresas-de-estacionamientos-crean-gremio-para-enfrentar-proyecto-que-elimina-cobros-en-mall>, 17 de abril de 2015.

POR TANTO,

Tenga el Señor Fiscal Nacional Económico por presentada la solicitud de investigación respecto de los hechos señalados en lo principal u otros que pudiesen ser detectados por la Fiscalía.

EN EL OTROSÍ: Se ruega tener por acompañado el texto publicado por SERNAC con el análisis de los oferentes de servicio en la Región Metropolitana.

MANUEL JOSÉ OSSANDÓN IRARRÁZABAL